



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-009-2018-00575-01
Demandante:	Mitter Vicente Ruiz Contreras
Demandado:	Colpensiones
Litisconsortes.	Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Departamento de Antioquia y Municipio de Medellín,
Asunto	Apelación auto excepciones previas
Procedencia	Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente	Sandra María Rojas Manrique

Tema: EXCEPCIÓN PREVIA INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL
LITISCONSORCIO POR PASIVA E INDEBIDO AGOTAMIENTO
DE LA RELAMACION ADMINISTRATIVA.

Medellín, enero veintinueve (29) de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, la, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO Y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como Magistrada Ponente, procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del decreto 806 de 2020, a decidir el recurso de **Apelación** contra el Auto que declaró no probadas las excepciones previas de indebida integración del litisconsorcio por pasiva e indebido agotamiento de la reclamación administrativa, propuestas por el señor apoderado del Municipio de Medellín, en el proceso ordinario laboral

instaurado por el señor Mitter Vicente Ruiz Contreras contra Colpensiones, Empresas Públicas de Medellín ESP, Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia. Radicado 05001310500920180057501.

1.- ANTECEDENTES

1.1. DEMANDA

El señor MITTER VICENTE RUIZ CONTRERAS por conducto de profesional del derecho, instauró ante los Juzgados Laborales del Circuito de Medellín, demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de COLPENSIONES, pretendiendo se reconozca y pague en su favor, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, teniendo en cuenta los tiempos cotizados y de servicio al Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín E.S.P., respecto a los cuales se emitió el bono pensional Tipo B, así como los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

Mediante auto proferido el 26 de octubre de 2018, el Juzgado de conocimiento admitió la demanda, frente a Colpensiones y en la audiencia de que trata artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, celebrada 30 de septiembre de 2019, ordenó la integración al proceso del Municipio de Medellín, el Departamento de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín.

Una vez notificado del auto admisorio de la demanda, el Municipio de Medellín, se opuso a las pretensiones y a su vez formuló las excepciones de ***indebida integración del litisconsorcio*** por pasiva, aduciendo que existe un tiempo que debe ser asumido por Empresas Varias de Medellín, comprendido entre el 31 de octubre de 1980 y el 02 de febrero de 1981, y la de ***falta de reclamación administrativa en debida forma***, toda vez que la reclamación se presentó respecto al reajuste de la indemnización sustitutiva, cuando la pretensión principal lo es el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por

lo que debió reclamarse el bono pensional con destino a dicho reconocimiento.

Las anteriores excepciones no obstante haberse formulado como de fondo, de acuerdo a su naturaleza, fueron resueltas como excepciones previas.

1.2.-DECISION DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 03 de marzo de 2020, el Juzgado de conocimiento declaró no probadas las excepciones previas formuladas por el apoderado judicial del Municipio de Medellín.

Como sustento de dicha determinación y respecto de la indebida integración del litisconsorcio, el a quo estimó que no existe ningún elemento de prueba allegado por la entidad territorial, que dé cuenta de tal afirmación y dé lugar a la prosperidad de la excepción y en cuanto a la falta de agotamiento de la reclamación administrativa, expuso que no queda claro, respecto a qué entidad no se presentó la reclamación administrativa y de acuerdo con el libelo demandatorio, se pretende el reconocimiento de los bonos tipo B por los tiempos no cotizados al ISS, de ahí que la reclamación dirigida a la reliquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, frente a Colpensiones esta completa y si se trata de Empresas públicas de Medellín señaló que, atendiendo al artículo 61 del Código General del Proceso, no es la parte demandante quien la vincula al proceso a las citadas entidades públicas, sino el Despacho y en tales casos, afirma, ha sido reiterativa la jurisprudencia que no es necesario el agotamiento de la reclamación administrativa, pues la razón de ser es proferir una sentencia uniforme en los casos en los cuales pueden verse afectados los derechos de terceros.

1.3. RECURSO

El apoderado del Municipio de Medellín, interpone el recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a la decisión, en cuanto no se vinculó al proceso a Empresas Varias de Medellín, entidad que goza de autonomía administrativa, presupuestal y financiera para comparecer al proceso, aduce que en el numeral 16 del acápite de pruebas, se relacionó la copia de la resolución 138 del 01 de abril de 1981, en la cual se detalla la distribución de los tiempos de servicio del demandante, con fechas y extremos, a cargo de los Fondos Comunes tanto del Municipio de Medellín y como de Empresas Varias de Medellín, documento público expedido por un funcionario público en ejercicio de funciones públicas, que se presume auténtico y debe dar prueba de su contenido, además de no haber sido objeto de tacha o reparo, que desvirtúe su alcance y contenido, siendo un actor que debe comparecer a responder por el tiempo que le corresponde, sumado a que el Municipio de Medellín no tiene acceso a la historia laboral del accionante al servicios de Empresas Varias de Medellín.

En cuanto al indebido agotamiento de la reclamación administrativa indicó que el artículo 6, establece con claridad que debe ser agotada la reclamación administrativa, como un presupuesto procesal, con mucha más razón, en eventos donde lo que se visualiza es un litisconsorcio necesario y es una carga procesal, pues la parte demandante debe identificar cuando hay un litisconsorcio necesario para agotar previamente la reclamación administrativa, el hecho de que el Despacho este invocando la facultad de integrar el contradictorio por pasiva, no releva a la parte demandante de agotar la reclamación.

1.4. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, ninguna de las partes emitió pronunciamiento.

2. CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66 A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.1. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a dirimir, radica en verificar si es procedente, revocar el auto mediante el cual el Juzgado de Primera Instancia, declaró no probadas las excepciones de indebida integración del litisconsorcio por pasiva y falta de agotamiento de la vía administrativa.

2.2. TESIS

La tesis con la cual se resuelve el problema jurídico, lo es que no se acredita el vínculo laboral entre Empresas Varias de Medellín y el demandante y por lo tanto esta última entidad no debe concurrir al pago del bono pensional tipo B, para el financiamiento de la indemnización sustitutiva de vejez, así mismo no es exigible a la parte actora el agotamiento de la reclamación administrativa frente a las entidades que fueron llamadas oficiosamente, por el funcionario de primer grado, a integrar el contradictorio por pasiva, en consecuencia el auto recurrido debe ser CONFIRMADO.

2.3. PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 100 del Código General del Proceso, determina las excepciones que podrán proponerse como previas, señalando en sus numerales 1 y 9 las siguientes:

1. *Falta de jurisdicción o de competencia.*

(...)

9. *No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.*

Litis consorcio necesario

La figura del litis consorcio necesario se encuentra prevista en el artículo 61 del Código General del Proceso:

Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes faltan para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan.

De acuerdo con la norma, para que exista un litisconsorcio necesario se requiere que en el proceso se resuelva sobre relaciones o actos jurídicos de los cuales sean parte varias personas, quienes se verán ineludiblemente afectadas al decirse sobre esas relaciones y actos y por lo tanto, su ausencia en el proceso conduciría a una sentencia inhibitoria, pues la sentencia de mérito sería nula, conforme al párrafo 5 del artículo 134 del CGP.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el auto AL2917-2018 del 11 de julio de 2018, igualmente recordó:

“Finalmente, no puede dejarse de lado que de tiempo atrás esta Corporación ha sostenido que la situación jurídica del litisconsorcio puede formarse, bien por la voluntad de los litigantes (facultativo), por disposición legal o por la naturaleza de las relaciones y los actos jurídicos respecto de los cuales verse el proceso (necesario u obligatorio).

En ese sentido, se ha señalado que se está en presencia de un litisconsorcio necesario cuando, como en este asunto, la relación de derecho sustancial está conformada por un número plural de sujetos, activos o pasivos, que no es susceptible de ser escindida, en tanto «se presenta como única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos, o como la propia Ley lo declara, cuando la cuestión haya de resolverse de manera unirme para todos los litisconsortes». CSJ AL, 58371, 24, jun. 2015.

En el caso concreto, debe señalarse que se configura el litis consorcio necesario entre las distintas entidades públicas para quienes laboró el demandante y que estarían obligadas a emitir el bono pensional tipo B, para el financiamiento de la indemnización sustitutiva, razón por la cual, en principio, afirmado el carácter de empleador de Empresas Varias de Medellín, debe ser integrada al proceso, a efectos de financiar el tiempo de servicios correspondiente al periodo alegado por el Municipio de Medellín, del 31 de octubre de 1980 al 02 de febrero de 1981.

No obstante, ello supone que se acredite la relación de trabajo entre el demandante y Empresas Varias de Medellín, por los extremos señalados, encontrando la Sala que, tal como lo concluyó el a quo al desatar el recurso de reposición, la prueba en la cual se funda el Municipio de Medellín, en la sustentación del recurso, resolución 138 del 01 de abril de 1981, glosada a folio 249, anverso, no acredita la vinculación del demandante con Empresas Varias de Medellín, en tanto, se señala como cargo: “Auditor. Auditoría E.E.V.V. de Medellín” y Dependencia “Contraloría” y en la liquidación se anota “FONDOS COMUNES 135 días, contados del 16 de junio al 30 de octu/80” E.E.V.V. pagará 106 días del 31 de octu/ al 02 de febrero/81”.

Ahora, de acuerdo con la normatividad que regía la estructura y funcionamiento de las Contralorías Municipales, para la fecha de prestación del servicio, es posible establecer que los cargos de auditor de los entes descentralizados están adscritos a la respectiva contraloría municipal, no obstante que el costo de los mismos estuviera a cargo del respectivo ente descentralizado, así lo ratifica el Acuerdo Municipal 42 de 1993, al señalar

ARTÍCULO 8o. Costo a cargo de los Organismos Descentralizados del Orden Municipal: Mientras norma superior aplicable disponga lo contrario, las Entidades descentralizadas del Orden Municipal, en los términos Constitucionales y Legales, sufragarán el costo del respectivo Control, en los términos del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9o. Las entidades que con anterioridad al Decreto Municipal 1150 de Diciembre 29 de 1992, tenían auditorías autónomas para el ejercicio del Control Fiscal, es decir, Empresas Públicas de Medellín, Empresas Varias y el Instituto Metropolitano de Valorización INVIAL, tendrán a su cargo el costo del Control Fiscal tomando como base la partida asignada por los respectivos Entes en el presupuesto de 1993, con incrementos anuales igual al porcentaje que se aplique para los gastos o servicios personales de la Administración Central, sumas éstas que se incorporarán al presupuesto de la Contraloría General de Medellín, en concordancia con la Constitución y la Ley a partir del primero (1) de enero de 1994).

De donde, concluye la Sala que el demandante hacía parte de la Contraloría Municipal como Auditor para el control Fiscal de Empresas Varias de Medellín, entidad descentralizada, quien asumía los costos de funcionamiento del servidor, pero éste no tenía un vínculo laboral directo con la entidad controlada.

De otra parte, tampoco es posible la integración a la litis, de la Contraloría General de Medellín, dado que no es ello lo pretendido en la formulación de la excepción, sumado a que para 1980 y 1981, las Contralorías Municipales, fungían como dependencia, para efectos presupuestales, del ente municipal, toda vez que su autonomía administrativa, presupuestal y financiera fue reconocida a partir de la Carta Política de 1991.

Aunado a lo anterior, el Municipio de Medellín expidió otros administrativos en el cuales reconoce la vigencia de la relación laboral por los períodos 31 de enero de 1977 al 10 de septiembre de 1970 y del 16 de junio de 1980 al 03 de febrero de 1981, que incluye el lapso comprendido entre el 31 de octubre de 1980 y el 02 de febrero de 1981, que hoy discute en este proceso, como lo son el certificado de información laboral, para bono pensional emitido el 27 de mayo de 2009, obrante a folio 295 anverso del expediente, la resolución 6484 del 01 de junio de 2017, mediante la cual se ordena el pago del bono pensional por valor de \$182.525.069, respecto a los tiempos certificados, glosada a folio 29 y el comprobante de pago efectivo del valor liquidado por bono pensional, que se efectuó del 07 de junio de 2017, aportado a folio 30 del plenario.

En consecuencia, no se puede predicar que exista una relación jurídica material con Empresas Varias de Medellín, única e indivisible, respecto del objeto de la sentencia que imponga integrarlo a la litis.

Falta de Agotamiento de la Reclamación Administrativa

En relación con la excepción de Falta de Agotamiento de la Reclamación Administrativa en debida forma, es de señalar que no es acertada la afirmación de la entidad recurrente, en torno a que la pretensión principal del proceso lo es el reconocimiento de la pensión de vejez, en tanto, según se constata en el expediente la pretensión lo es el reconocimiento y pago la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, con la inclusión de los bonos pensionales tipo B, por los tiempos públicos no cotizados.

En el expediente se acreditó que el demandante agotó la reclamación administrativa ante Colpensiones al solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez el 13 de julio de 2015, emitiéndose la resolución GNR 323327 del 20 de octubre de 2015 (folio 15) y en particular, en virtud del recurso de reposición interpuesto frente a la referida resolución, en el cual expresamente se solicitó pronunciamiento “*en relación con el bono pensional que Colpensiones debe cobrar al Municipio de Medellín, el Departamento de Antioquia y*

Empresas Públicas de Medellín, en concordancia con los certificados aportados en las dos oportunidades mencionadas e incluir su valor actualizado en el pago que se me debe hacer como faltante de la indemnización sustitutiva.”; petición que dio lugar a la expedición de la resolución VPB17015 del 14 de abril de 2016. (folios 17).

Ahora bien, respecto a las entidades públicas vinculadas al proceso, se advierte que éstas tenían conocimiento de la reclamación del demandante, en tanto en el trámite de la solicitud de pensión de vejez, ante el otrora Instituto de Seguros Sociales, esta entidad, siendo la competente para ello, solicitó la confirmación del tiempo público a cada una de las entidades públicas hoy vinculadas al proceso, para el cálculo del bono pensional, así: el 23 de septiembre de 2009 al Municipio de Medellín y a Empresas Públicas de Medellín E.S.P (folios 20 y 22) y el 05 de octubre de 2009 al Departamento de Antioquia (folio 21). De la misma manera Colpensiones en cumplimiento de sentencia de tutela proferida el 19 de diciembre de 2016, por el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín, inició el trámite de cobro del bono pensional Tipo B, requiriendo a las citadas entidades públicas mediante comunicación fechada el 26 de mayo de 2017, para la emisión y pago del mismo. (véase folios 23, 25 y 27).

De otra parte, no era exigible al demandante el agotamiento de la reclamación administrativa respecto al MUNICIPIO DE MEDELLIN, EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, dado que estas entidades fueron vinculadas oficiosamente, por el funcionario judicial, en cumplimiento del mandato del artículo 61 del Código General del Proceso, al considerar que la comparecencia de las mismas al proceso era indispensable para decidir de mérito, por lo que, como bien lo precisó el A quo, la parte demandante no tenía la carga procesal de realización de la reclamación previa, en la medida en que las pretensiones de la demanda, en sentir de promotor del proceso, debían dirigirse únicamente frente a Colpensiones y bajo esta consideración acreditó el agotamiento de la reclamación solo con respecto a la administradora pensional.

Por las consideraciones anteriores el auto objeto de recurso debe ser CONFIRMADO, condenando en costas en esta instancia al Municipio de Medellín, para lo cual se fija como agencias en derecho la suma de \$908.526, en favor del accionante.

3. DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** el Auto proferido el tres (03) de marzo de dos mil veinte (2020) por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **MITTER VICENTE RUIZ CONTRERAS** en contra de **COLPENSIONES, MUNICIPIO DE MEDELLIN E.S.P, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, Y EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN**, por medio del cual se declararon no probadas las excepciones previas de indebida integración del litisconsorcio por pasiva y falta de agotamiento de la vía gubernativa en debida forma.


SEGUNDO: Se **CONDENA** en costas en esta instancia al Municipio de Medellín, se fijan como agencias en derecho la suma de **\$908.526**, en favor del demandante.

Lo resuelto se notifica por Estados, de conformidad con el literal c) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE



CARLOS JORGE RUIZ BOTERO



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No.**015** fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 1 de febrero de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario